



Miles de personas exigieron de nuevo al gobierno federal que se haga justicia en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Miles de personas participan este sábado en marchas y protestas en distintos puntos de México para conmemorar el primer aniversario de la desaparición de 43 estudiantes y cuyo destino todavía se desconoce.

Padres y familiares de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapade encabezaron los actos centrales en Ciudad de México, una manifestación que partió a mediodía de la Presidencia de la República, y en la que miles de personas volvieron a exigir al gobierno federal que se haga justicia en un caso que conmocionó dentro y fuera del país y fue el más duro ejemplo de la colusión entre autoridades y la delincuencia organizada.

“Es importante que todos estemos aquí para decir que estamos indignados, que queremos un cambio, acceso a la justicia y cero violaciones a los derechos humanos”, dijo Mariana Cervantes, una psicóloga embarazada y acompañada de su hijo de siete años. Las banderas de México en blanco y negro se mezclaban con las fotografías de los desaparecidos, los reclamos de justicia y el número 43, ya sinónimo de tragedia.

“Ayer fueron sus hijos, mañana, Dios no lo quiera, pueden ser los míos, o mis nietos”, señaló Socorro Rodríguez, un ama de casa de la capital.
“Los padres de los desaparecidos deben saber que no están solos”.

María Guadalupe Vivencio, una mujer del norteño estado de Tamaulipas cuya falda era una bandera de México ensangrentada, decía entender bien el dolor porque tiene tres familiares muertos. Pero aseguró que apoyar a los padres de Ayotzinapa es importante.

"Esto es un ejemplo para que los demás mexicanos despierten y no callen", subrayó. En estados como Guerrero o Michoacán hubo protestas previas esta semana y las fuerzas de seguridad estaban en alerta el sábado ante posibles focos de violencia.

El 26 de septiembre de 2014, policías coludidos con la delincuencia organizada atacaron a los estudiantes que habían llegado a la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, a tomar unos autobuses para participar en una manifestación.

Según un grupo de expertos internacionales, el ataque contra los estudiantes fue desproporcionado y coordinado, mientras fuerzas federales monitorearon los sucesos sin prestar ninguna ayuda a las víctimas. El grupo dijo que se violaron los derechos humanos de 180 personas, entre las cuales hubo seis asesinados y 43 estudiantes desaparecidos.

Organizaciones de todo tipo, desde Naciones Unidas a la Iglesia Católica, así como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y senadores estadounidenses, hicieron pública su preocupación por la falta de avances en la investigación y solicitaron al gobierno mexicano —con más o menos contundencia— que esclarezca el caso, máxime después de que el informe de los expertos internacionales echó por tierra la versión oficial de los hechos, que aseguraba que los 43 estudiantes fueron calcinados en un basurero. (I).